



— PUENTE — POLÍTICO

#OPINIÓN



EL COSTO OCULTO DE LA REFORMA ELECTORAL

Menos dinero no significa menos influencia del dinero en la política. Por el contrario, abre la puerta a una mayor dependencia de recursos

La reforma electoral entra en su momento clave. La próxima semana comenzará su discusión formal con los coordinadores de Morena en San Lázaro, **Ricardo Monreal**, y en el Senado, Adán Augusto López. Aunque el proyecto aún no está concluido, dos banderas concentran el discurso oficial:

reducir el financiamiento a los partidos políticos y disminuir o eliminar a los legisladores plurinominales.

Ambas propuestas suenan bien en el papel. Ahorro, austeridad y rechazo a los privilegios son conceptos políticamente rentables. El problema es que, detrás de esa narrativa, se esconde el riesgo de debilitar los mecanismos que garantizan la pluralidad y el equilibrio del sistema democrático.

Los plurinominales no surgieron como un capricho del sistema, sino como un antídoto contra el autoritarismo. Su función fue impedir que una fuerza política se apropiara del Congreso y silenciara a la oposición. Es cierto que los partidos los degradaron, convirtiéndolos en cuotas y premios internos, pero eliminarlos no corrige ese vicio: lo profundiza. Sin representación proporcional, el Congreso vuelve a fabricar mayorías artificiales y a cerrar el paso

Una reforma de esa magnitud debería surgir de un consenso amplio y honesto

a las voces incomodas.

Algo similar ocurre con la reducción del financiamiento público. Menos dinero no significa menos influencia del dinero en la política. Por el contrario, abre la puerta a una mayor dependencia de recursos privados, a la opacidad y a la intervención de intereses económicos. Los

recortes no afectan por igual. Golpean primero a las minorías y a los partidos con menor estructura, mientras las fuerzas dominantes conservan poder territorial, acceso mediático y control institucional. La consecuencia es una democracia más desigual, con menos competencia real y menos alternativas para el electorado. La austeridad, cuando se convierte en dogma, deja de ser una política pública y se transforma en una herramienta de concentración de poder.

Además, el momento político no es menor. Una reforma de esta magnitud debería surgir de un consenso amplio y honesto, con especialistas, autoridades electorales y oposición real en la mesa. Convertirla en una bandera partidista o aprobarla por mayoría sin un debate profundo no sólo tensiona al sistema, sino que debilita la legitimidad de las reglas del juego de los próximos procesos electorales.

Hay también una contradicción de fondo: mientras se plantea recortar recursos y representación, se concentra cada vez más poder político en una sola fuerza. Reducir contrapesos en un contexto de mayorías dominantes no es modernizar la democracia, es ponerla en riesgo. Las reglas electorales no deben diseñarse para quien gobierna hoy, sino para proteger a quienes podrían gobernar mañana.

El verdadero dilema no es cuánto cuesta la democracia, sino cuánto cuesta perderla. Si la reforma electoral avanza sin corregir estos riesgos, México no estará ahorrando recursos, estará pagando el precio de un retroceso político disfrazado de popularidad y austeridad.

LAU.PUENTEE@GMAIL.COM / @LAURAPUENTEE